



**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN**  
**SALA QUINTA DE DECISION LABORAL**

Proceso:	Ejecutivo Conexo
Radicación:	05129-31-03-001-2021-00257-01
Ejecutante:	Alveiro de Jesús Chavarriaga
Ejecutado:	Mina la Margarita S.A.S.
Asunto:	Apelación auto
Procedencia:	Juzgado Civil del Circuito Caldas (Antioquia)
Ponente:	Sandra María Rojas Manrique
Temas:	Limitación medida de embargo

**Medellín, julio veintinueve (29) de dos mil veintidós (2022)**

En la fecha, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados JULIO RAFAEL TORDECILLA PAYARES, VICTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE, como magistrada sustanciadora, decide los recursos de apelación interpuestos por el apoderado de la parte ejecutada, en contra del auto proferido el 1º de octubre de 2021 por el Juzgado Civil del Circuito Caldas (Ant), por medio del cual se resolvió sobre la limitación de las medidas de embargo en el trámite del proceso ejecutivo conexo, promovido por el señor ALVEIRO DE JESÚS CHAVARRIAGA en contra de la MINA LA MARGARITA S.A.S. Radicado 05129-31-03-001-2021-00257-01.

## **1. ANTECEDENTES**

El Juzgado Promiscuo de Circuito Adjunto de Caldas, mediante sentencia proferida el 15 de febrero de 2013, dentro del proceso ordinario cumplido entre las mismas partes, despachó desfavorablemente las pretensiones del demandante, declarando probadas las excepciones de ausencia de culpa por parte de la empresa y culpa de la víctima.

La Sala Cuarta de Decisión Laboral de esta Corporación, mediante providencia del 22 de abril de 2016, con ponencia de la magistrada Nora Edith Méndez Álvarez, revocó la sentencia de primera instancia y en su lugar, declaró probada la culpa patronal de la empresa Mina la Margarita S.A., condenando a la demandada al pago de los perjuicios materiales liquidados en la suma de \$159.550.925,11, debidamente indexados; perjuicios morales por 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes y al pago de la suma de \$438.670 por la omisión en el preaviso que debió dar al trabajador.

El 02 de septiembre del 2021, el Juzgado cognoscente libró mandamiento de pago en favor del ejecutante, por los siguientes conceptos: 1) por perjuicios materiales, \$159.550.925,11, debidamente indexado; 2) por perjuicios morales, 100 salarios mínimos mensuales vigentes y 3) por la suma de \$438.670, por la omisión en el preaviso que debió darse al trabajador. A su vez, accedió al embargo de las sumas de dinero producto de los contratos por suministro de carbón que tiene la sociedad ejecutada con las sociedades Enka de Colombia S.A., Papelsa S.A. y Coltejer S.A.

## **2.- AUTO RECURRIDO**

Por auto del 1º de octubre de 2021, el Juzgado Civil del Circuito de Caldas, entre otros aspectos, negó la solicitud de nuevas medidas cautelares presentada por la parte ejecutante y limitó las medidas ya decretadas, esto es, el embargo de las sumas de dinero producto de los contratos por suministro de carbón que tiene la sociedad ejecutada con las sociedades Enka de Colombia S.A., Papelsa S.A. y Coltejer S.A., a la suma de \$95.000.000, decisión frente a la cual

el apoderado de la parte ejecutada presentó recurso de reposición y en subsidio apelación.

Atendiendo a lo anterior, a través de auto fechado del 29 de octubre de 2021, el Juzgado se abstuvo de resolver el recurso de reposición por encontrar que el mismo se interpuso por fuera del término legal y procedió a conceder el recurso de apelación conforme lo dispuesto en el numeral 7° del artículo 65 del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social, disponiendo igualmente, señalar como de audiencia para resolver excepciones el 8 de marzo de 2022, omitiendo remitir el expediente para surtir la alzada.

### **3. APELACION**

El apoderado de la sociedad ejecutada, interpone recurso de reposición y en subsidio apelación en contra del auto mediante el cual el Despacho limitó la medida de embargo, exponiendo inicialmente que se ha presentado un desconocimiento de las actuaciones judiciales y el expediente digital, situación que tiene un impacto procesal por vulneración al derecho de defensa y contradicción. Sostuvo el apoderado que no es posible que se estén haciendo evaluaciones en torno del concepto de indexación cuando su valor estimado es incierto, pues no ha sido liquidado, ni aprobado judicialmente, por lo que insistir que debe garantizarse el pago de \$95.000.000, cifra respecto de la cual se desconoce su procedencia, desborda la realidad procesal e ingresa en hipótesis no plausibles y descalificadoras de la confianza legítima y la seguridad jurídica en pro de la parte que se representa, quien ha cumplido 100% con los pagos ordenados en el mandamiento de pago, tal y como se puede cotejar con los depósitos judiciales efectuados a favor de la parte actora, sin que se pueda exponer a la ejecutada a cargas extras, sin causa legal.

Concluyendo que la medida cautelar frente a cada una de las entidades sobre las cuales tiene créditos la ejecutada por suministro de materiales, Enka de Colombia S.A., Papelsa S.A. y Coltejer S.A., de \$95.000.000, para garantizar la indexación, la cual itera no es clara, proyecta triplicar la garantía cautelar por el valor total de la obligación a cada una de las entidades mencionadas.

Igualmente argumenta que de desestimar los argumentos que hacen inviable la medida, indica que la proporcionalidad debería conducir a la decisión de que solo frente a una de las sociedades enunciadas se ordene la medida reprochada o en el peor de los casos, si se aceptara que fuera frente a las tres, habría de limitarse la cuantía en la tercera parte de los \$95.000.000

#### **4.- ALEGATOS EN SEGUNDA INSTANCIA**

Dentro de la oportunidad procesal se pronunciaron los apoderados de ambas partes, el apoderado del ejecutante realiza un recuento de las actuaciones que se han surtido tanto al interior del proceso ejecutivo, como del ordinario laboral que dio origen al primero, así mismo, llama la atención respecto de las múltiples actuaciones procesales que ha desplegado la parte ejecutada mediante la presentación de solicitudes y recursos entorpeciendo el trámite del proceso. En lo que respecta a la decisión objeto de pronunciamiento señaló que para evitar que se configure un detrimento a los derechos que posteriormente se le reconozcan al accionante, como puede ser la fijación de agencias en derecho y el valor de la indexación, solicita, se confirme el auto del 01 de octubre de 2021, toda vez que con los \$95.000.000 se estarían cubriendo futuros valores reconocidos en el proceso.

Finalmente, solicita se dé trámite al recurso de apelación instaurado el 30 de noviembre de 2021 sobre el auto del 17 de noviembre de 2021 que incorporó y aprobó la liquidación de costas en el proceso ordinario, el cual fue concedido por el Juzgado Civil del Circuito de Caldas el 7 de abril de 2020, ya que por unidad de materia es el tribunal el competente para conocer las tres apelaciones instauradas.

En igual sentido el apoderado de la sociedad ejecutada, realiza un recuento de las actuaciones surtidas por el Juzgado de Conocimiento, tanto en el proceso ordinario, como en el proceso ejecutivo, para concluir que ambos trámites se encuentran finalizados. Adicionalmente, reitera las manifestaciones planteadas en la sustentación del recurso de apelación contra el auto del 01 de octubre de 2021, afirmando que el juzgado de primera instancia con sus decisiones, no

solo no ha impulsado el proceso como debe ser, esto es, ordenando la terminación del mismo por pago total, sino que, además, se abstuvo de resolver en forma oportuna las solicitudes de la parte ejecutada y no envió el expediente al superior para la resolución del recurso de alzada, ignorando el sentido y regulación que las normas procesales adjudican a la doble instancia, sometiendo a su representada a un trato procesal desigual, desconociendo sus derechos y generando graves perjuicios.

## **5.- CONSIDERACIONES**

La competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación, de conformidad con el artículo 57 de la ley 2 de 1984, y los artículos 65 y 66 del CPL y de la SS, modificados por los artículos 29 y 35 de la ley 712 de 2001.

Conforme a lo anterior, resulta importante precisar que, en esta oportunidad, corresponde a esta Sala de Decisión, pronunciarse respecto del auto proferido por el Juzgado de Primer Grado, el 01 de octubre de 2021, única y exclusivamente en lo que atañe a la medida cautelar, toda vez que sobre dicho punto fue que se concedió el recurso de alzada, advirtiendo, en relación al recurso presentado contra el auto que liquidó y aprobó las costas procesales en el trámite del proceso ordinario, que dicho recurso a la fecha no ha sido remitido al Despacho de la magistrada ponente y en tal sentido, no puede emitir pronunciamiento alguno la Sala, correspondiendo a las partes realizar las peticiones de impulso ante el Juzgado para que remita las diligencias a esta Corporación.

### **5.1.- Problema Jurídico**

Debe determinar la Sala:

¿Si es procedente revocar el auto proferido el 1º de octubre de 2021, por medio del cual se limitó el embargo de las sumas de dinero producto de los contratos por suministro de carbón que tiene la sociedad ejecutada con las

sociedades Ema de Colombia S.A., Papelsa S.A. y Coltejer S.A., a la suma de \$95.000.000, para en su lugar disponer el levantamiento de la medida cautelar, en caso contrario, si es posible limitar dicha la citada medida cautelar?

## **5.2- Tesis**

El problema jurídico se resuelve bajo la tesis según la cual, resulta procedente la medida cautelar decretada, toda vez que la sociedad ejecutada debe responder por el pago de lo adeudado al ejecutante, no obstante, se advierte que la medida resulta desproporcional y excesiva en relación con el concepto pendiente de pago, esta es, la indexación ordenada por esta Corporación, razón por la cual deberá modificarse el auto recurrido.

## **5.3- Premisas Normativas**

Las medidas cautelares en el proceso ejecutivo laboral, no se encuentran reguladas en el Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, por lo tanto, se encuentran sujetas a las disposiciones del Código General del Proceso, según remisión del artículo 145 del primer estatuto y del artículo 1 de este último.

En relación a las medidas cautelares en procesos ejecutivos, el artículo 599 del Código General del Proceso, establece:

*“Desde la presentación de la demanda el ejecutante podrá solicitar el embargo y secuestro de bienes del ejecutado.*

*Cuando se ejecute por obligaciones de una persona fallecida, antes de liquidarse la sucesión, sólo podrán embargarse y secuestrarse bienes del causante.*

*El juez, al decretar los embargos y secuestros, podrá limitarlos a lo necesario; el valor de los bienes no podrá exceder del doble del crédito cobrado, sus intereses y las costas prudencialmente calculadas, salvo que se trate de un solo bien o de bienes afectados por hipoteca o prenda\* que garanticen aquel crédito, o cuando la división disminuya su valor o su venalidad.*

*En el momento de practicar el secuestro el juez deberá de oficio limitarlo en la forma indicada en el inciso anterior, si el valor de los bienes excede ostensiblemente del límite mencionado, o aparece de las facturas de compra, libros de contabilidad, certificados de catastro o recibos de pago de impuesto predial, o de otros documentos oficiales, siempre que se le exhiban tales pruebas en la diligencia.*

*En los procesos ejecutivos, el ejecutado que proponga excepciones de mérito o el tercer afectado con la medida cautelar, podrán solicitarle al juez que ordene al ejecutante prestar caución hasta por el diez por ciento (10%) del valor actual de la ejecución para responder por los perjuicios que se causen con su práctica, so pena de levantamiento. La caución deberá prestarse dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del auto que la ordene. Contra la providencia anterior, no procede recurso de apelación. Para establecer el monto de la caución, el juez deberá tener en cuenta la clase de bienes sobre los que recae la medida cautelar practicada y la apariencia de buen derecho de las excepciones de mérito.*

*La caución a que se refiere el artículo anterior, no procede cuando el ejecutante sea una entidad financiera o vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia o una entidad de derecho público.*

*Cuando se trate de caución expedida por compañía de seguros, su efectividad podrá reclamarse también por el asegurado o beneficiario directamente ante la aseguradora, de acuerdo con las normas del Código de Comercio”.*

Asimismo, el artículo 101 del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social, contempla:

*“Solicitado el cumplimiento por el interesado, y previa denuncia de bienes hecha bajo juramento, el Juez decretará inmediatamente el embargo y secuestro de los bienes muebles o el mero embargo de inmuebles del deudor, que sean suficientes para asegurar el pago de lo debido y de las costas de la ejecución”.*

#### **5.4. Del Caso Concreto**

Conforme a la sentencia emanada de esta Corporación el 22 de abril de 2016, es claro que la sociedad hoy ejecutada fue condenada a cancelar al señor Alveiro de Jesús Chavarriaga, la suma de \$159.550.925,11 por concepto de perjuicios materiales, suma que deberá indexarse, asimismo, los perjuicios morales fijados en 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes y al pago de la suma de \$438.670 por la omisión de preaviso, evidenciándose que en dichos términos el

Juzgado Civil del Circuito de Caldas, libró el mandamiento de pago el 2 de septiembre de 2021.

Con el fin de lograr la satisfacción de las acreencias reconocidas al ejecutante, es evidente para la Sala, que la activa estaba facultada para rogar el decreto de medidas cautelares, como en efecto aconteció, precisándose que de las diferentes solicitudes de cautelas pretendidas solo se accedió al embargo de las sumas de dinero producto de los contratos que por suministro de carbón tiene la sociedad ejecutada con las sociedades Enka de Colombia S.A., Papelsa S.A. y Coltejer S.A., medida que posteriormente se limitó a la suma de \$95.000.000, no existiendo duda alguna en relación a la procedencia de dicha medida cautelar.

Ahora, el 14 de septiembre de 2021, la parte ejecutada allegó solicitud de terminación del proceso por pago total de la obligación, anexando comprobante de consignación por valor de \$250.842.195, suma que comprende los perjuicios materiales \$159.550.925,11, perjuicios morales \$90.852.600 y los \$438.670 por la omisión de preaviso, siendo evidente que no se canceló valor alguno por concepto de indexación de los perjuicios materiales, razón por la cual es procedente mantener vigente la medida cautelar al existir un pago pendiente por cubrir.

Dicho lo anterior, se observa en el anexo 15 del expediente digital, que la parte ejecutante se opuso a la solicitud de terminación por pago de la ejecutada, aportando, liquidación realizada por consultor actuarial, según la cual, la indexación adeudada, asciende a la suma de \$93.231.689, mientras tanto, la pasiva adjunto liquidación realizada también por un actuario, anexo 20 del expediente digital, en la cual se señala que la indexación de los perjuicios materiales equivale a \$2.780.710.

Se sigue de lo anterior, que estando pendiente el pago de la indexación y toda vez que conforme lo reclama la ejecutante estima que la misma asciende a \$93.231.689, sin que sea la oportunidad procesal para que la Sala se pronuncie sobre el acierto o desacierto de las liquidaciones que se presentan, pues tal estudio es propio de la decisión de las excepciones, la medida debe ser limitada



al valor máximo discutido. No obstante, se encuentra la *quo* no especificó que la medida de embargo sobre las sumas de dinero producto de los contratos que por suministro de carbón tiene la sociedad ejecutada con las sociedades Enka de Colombia S.A., Papelsa S.A. y Coltejer S.A., se limita a \$95.000.000 respecto al total de dineros que puedan ser embargados, quedando dicho valor como limitante en relación con cada sociedad, razón por la cual el embargo, resulta excesivo, como lo explica la pasiva, dado que sumados esos \$95.000.000, respecto de cada una de las sociedades, esto es, de Enka de Colombia S.A., Papelsa S.A. y Coltejer S.A., la limitación de la medida alcanzaría un total de \$285.000.000, siendo indiscutible que al tenor de lo dispuesto en el artículo 599 del Código General del Proceso, el juez debe limitar las cautelas al valor necesario para cubrir la obligación, sin que se pueda exceder el doble del crédito, pues la medida debe guardar una proporción respecto de la obligación que se ejecuta.

En relación a la proporcionalidad o excesos de las medidas cautelares, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia SC 3930 de 2020, indicó:

*“Significa que el carácter excesivo de una cautela es un asunto que requiere considerar, no sólo el valor de los activos frente al monto de la obligación insatisfecha, sino que también las variables relativas al (i) número de bienes perseguidos, (ii) existencia de garantías reales que graven los activos, y (iii) efectos de la división en su valor comercial.*

*Tal es el entendimiento dispensado por esta Corporación al señalar:*

*De modo que perseguir bienes cuyo valor excede los límites establecidos por la propia ley, sin que concurra alguna de las circunstancias de excepción que ella misma indica, torna abusivo el ejercicio del derecho subjetivo establecido por el art. 2488 del C. Civil, y como se dijo, compromete la responsabilidad de quien así actúa, si con tal proceder causa un perjuicio y se le puede imputar un comportamiento temerario o de mala fe (SC099, 27 nov. 1998, exp. n.º 4909)”.*

Corolario de lo expuesto, en aras de que se incurra en excesos y se cause un perjuicio a la sociedad ejecutada, encuentra procedente la Sala modificar el auto objeto de recurso, en el sentido de limitar la medida de embargo a \$95.000.000, respecto de la sumatoria de los dineros producto de los contratos que por suministro de carbón tiene la sociedad ejecutada con las sociedades Enka de Colombia S.A., Papelsa S.A. y Coltejer S.A., en virtud de ello no podrá practicarse la medida de embargo en forma simultánea respecto a las tres sociedades contratantes, debiendo comunicarse la medida en el orden en que fue solicitada, esto es, inicialmente respecto a la sociedad Enka de Colombia S.A. y en caso de ser insuficiente los dineros embargados, se procederá a comunicar la cautela a Papelsa S.A. y finalmente a Coltejer S.A., respecto a los dineros faltantes.

## **6.- DECISION**

En mérito de lo expuesto la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

### **RESUELVE**

Se **MODIFICA** el auto proferido el 1º de octubre de 2021, por el Juzgado Civil del Circuito Caldas (Ant), dentro del proceso ejecutivo conexo, promovido por el señor ALVEIRO DE JESÚS CHAVARRIAGA en contra de la MINA LA MARGARITA S.A.S., en el sentido de limitar la medida de embargo a \$95.000.000, respecto de la sumatoria de los dineros producto de los contratos que por suministro de carbón tiene la sociedad ejecutada con las sociedades Enka de Colombia S.A., Papelsa S.A. y Coltejer S.A., en virtud de ello no podrá practicarse la medida de embargo en forma simultánea respecto a las tres sociedades contratantes, debiendo comunicarse la medida en el orden en que fue solicitada, esto es, inicialmente respecto a la sociedad Enka de Colombia S.A. y en caso de ser insuficiente los dineros embargados, se procederá a comunicar la cautela a Papelsa S.A. y finalmente a Coltejer S.A., respecto a los dineros faltantes.

La anterior decisión, se notifica en ESTADOS de conformidad el literal c) del artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social.

Los Magistrados,

  
**SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE**

  
**JULIO RAFAEL FORDECILLA PAYARES**

  
**VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO**

La presente providencia fue notificada por estado No.133 fijado en la secretaría de la sala del Tribunal Superior de Medellín, a las ocho de la mañana (8:00 a.m.) del 1° de agosto de 2022

RUBEN DARIO LOPEZ BURGOS

Secretario